

hacer mas sensibles á cada ciudadano los atentados individuales que le habia ordenado no temer. ¿Qué significa la inmutabilidad que se tiene la osadía de atribuirle? Una ley inmutable, es aquella que se observa, y se comienza á derribar una constitucion desde el momento en que se desobedece á alguna de sus disposiciones literales; y 42 que no se han violado en perjuicio del quejoso, las garantías otorgadas á todos los habitantes de la República por los arts. 101, fraccion 2ª y 14 de la Constitucion federal; en consecuencia, la Suprema Corte de Justicia juzgando definitivamente, decreta: que debe confirmar y confirma la sentencia pronunciada por el tercer suplente del Juzgado de Distrito del Estado de Jalisco en 9 de Enero del presente año, que dice: La Justicia de la Union no ampara ni protege á Francisco Soto.»

Devuélvanse estos autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, librándose igual copia al Poder Ejecutivo federal por conducto del Ministerio de Relaciones, conforme al decreto de 19 de Febrero del presente año; y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo sentenciaron el Presidente y Magistrados que formaron la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*E. Montes.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacán por el Lic. Bruno Patiño, en representación de la mayor parte de los vecinos de Charo, contra los procedimientos del Jefe Político de Morelia, que ha adjudicado á varias personas, terrenos pertenecientes á la Comunidad de indígenas del mismo Charo

Pedimento del C. Promotor Fiscal

C. Juez de Distrito:

El C. Lic. Bruno Patiño en legítima y acreditada representación de la Comunidad de indígenas del pueblo de Charo, expone á este Juzgado, que en 21 de Agosto del año 1705, compraron sus representantes á los Duques de Terranova y Monte León, las tierras, montes y ojos de agua, situados en el camino que conduce al pueblo de Zitzio distante como tres leguas de Charo, constituyendo á favor de los vendedores una pensión anual de veinte pesos, que cubrieron religiosamente. Que deseando quitar toda clase de limitaciones á este dominio á fin de que fuera perfecto y absoluto, celebraron en 7 de Marzo de 1836, un convenio con el Sr. D. Lucas Alaman, como apoderado del dueño de este censo, y á quien tocó en herencia, quedando desde esa fecha libres los terrenos y montes de tal gravámen, y con facultad los indígenas para disponer libremente de la cosa gravada. Estos hechos quedan comprobados con las respectivas escrituras que se acompañan. Que como en el año de 1827 se dictaron por el Gobierno del Estado las primeras leyes que ordenaron el reparto de los terrenos de indígenas, y el de los de Charo se inició desde entonces conforme al reglamento de 4 de Febrero del año siguiente, se continuó la operación hasta quedar aprobada por el Gobierno en 20 de Mayo de 1861, según se acredita con el acuerdo que en copia se

acompañía. Que como los indígenas tenían necesidad de conservar un fondo para los gastos de la Tenencia de Justicia, no se comprendieron en el reparto; los montes para pastos y astilleros; ni los panchos conocidos con los nombres de Cuñilzén, La Yerbabuena, el Guayabo, la Cofradía, el Terro, los Ocuates, la Lagunilla, la Camúeza, los Trojes, los Cajones y el Bostue que continuaron en arrendamiento para el objeto dicho, de acuerdo enteramente con el Gobierno del Estado.

Que de la propiedad de estos terrenos fueron despojados por el Prefecto de la Capital, quien por haberlos comprendido en la ley de 25 de Junio de 1856, los adjudicó a varios denunciantes sin haberles siquiera citado. Que como dichas adjudicaciones se oponen no sólo a la verdadera inteligencia de la ley citada, sino a las varias resoluciones que cita en su escrito, y fueron acordadas con posterioridad en virtud de varias consultas que se hicieron al Supremo Gobierno general, investido entonces de facultades amplísimas, juzga violada en la persona de sus representados, primero, la garantía del art. 99 constitucional, porque de hecho se les impide gozar en común de los montes, pastos y aguas, impidiéndoselos de esta manera, asociarse y reunirse pacíficamente con el objeto propuesto; segundo, la garantía del art. 16, supuesto que esta privación y la de procurarse los recursos necesarios para atender a los gastos de, que antes he hablado, proviene de una autoridad incompetente, confirmandose este aserto con presencia de la frac. 1ª del art. 97, que solo reserva a los Tribunales de la federación, el conocimiento y aplicación de las leyes generales, habiendo en este caso una notoria usurpación de atribuciones; y por último, la del art. 27 que garantiza la propiedad y la posesión.

Por todas estas razones, y con fundamento de las fracs. 1ª y 3ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, pedia el amparo de la Justicia federal, contra los procedi-

mientos indicados del C. Prefecto de esta Capital.

Esta autoridad al confesar el hecho capital que motiva este juicio, se funda en la Suprema circular de 2 de Marzo de 1872, que hace extensivos los bienes expresados, a las adjudicaciones de que habla la ley de 25 de Junio.

Examinada conforme a los principios de esta misma ley, la cuestión de si para los efectos de la misma, deben considerarse como corporaciones las comunidades de indígenas, debe resolverse en un sentido negativo, supuesto que ninguna de ellas tienen el carácter de duración perpetua é indefinida, que como condición indispensable, se exige por el art. 39. Las varias razones que aduce a este propósito el representante de los indígenas, son mas que suficientes para confirmar el aserto, y por lo mismo se abatiene este Ministerio de entrar en mas pormenores. Esto solo bastaría para que determinada una vez la aplicación de la ley, se comprenda desde luego que la autoridad responsable no ha podido legalmente hacer las adjudicaciones de que se trata.

Son notables ademas las varias resoluciones que sobre iguales casos se encuentran en el tomo primero, parte primera del nuevo Código de reforma del Lic. D. Blas Gutiérrez, correspondiente al 10 de Diciembre de 1862. Es de advertir, que en el caso presente, se trata de terrenos adquiridos por los indígenas de Charo, con justo título, y que los disfrutaron sin reconocimiento alguno, por lo que no solo estan exceptuados de la adjudicación a favor de estranos, sino que deben repartirse entre los indígenas, conforme a las Supremas resoluciones de 2 de Enero, 11 y 13 de Noviembre y 20 de Diciembre de 1856, 29 de Abril de 1861, 14 de Octubre y 10 de Diciembre de 1862 y muy especialmente la de 2 del mismo mes y año.

Que los terrenos en cuestión no son de repartimiento, es de todo punto incuestionable, con vista de los títulos que se acom-

pañan al escrito principal, pero aún suponiéndoseles con este carácter para sostener la aplicación de la ley sobre adjudicaciones, hasta consultar el Código de reforma citado, para convencerse de que estos terrenos deben repartirse entre los indígenas, en virtud de aclaraciones hechas á favor de esta clase menesterosa por el Supremo Gobierno general, en uso de sus amplias facultades. Puede verse entre otras, las de 14 de Octubre de 1862, y las que citan, y su nota á las páginas 819 y 20 del Código citado en su segundo tomo.

Los varios casos que sobre el particular se han ofrecido en los Tribunales federales y que han motivado las respetables ejecutorias de la Suprema Corte, se han fundado para su resolución, en las disposiciones citadas, según es de verse en el Semanario Judicial de fojas 699 á 112 del tomo 2º de la segunda parte, en donde se encuentran todas las citas respectivas.

Siendo ya un hecho perfectamente demostrado que no han debido proceder las adjudicaciones de que se trata, son incuestionables, la violación de todas las garantías de que hace mérito la parte quejosa, atento el perfecto encadenamiento de todas ellas en el caso de que se trata.

Por virtud de todo lo expuesto y con fundamento de la ley orgánica de 20 de Enero 1869, el Promotor pide se declare que: la Justicia de la Unión ampara y protege á los indígenas del pueblo de Charo, representados legalmente por el C. Lic. Bruno Patiño, contra los actos de adjudicación verificados por el C. Prefecto de esta Capital, y que se han dejado consignados.

Morelia, Diciembre 27 de 1874.—N. Caballero.

Otro Pedimento del C. Promotor Fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal ha examinado las constancias que obran en este expediente en calidad de prueba; y como las observaciones que de ellos se desprenden, quedan ya consignadas en el escrito del representante de los quejosos, solo hace presente, que las comunidades de indígenas como asociaciones de interés particular, quedan sujetas á las reglas del contrato de sociedad, según el art. 47 del Código civil, reproduciendo en todas sus partes el pedimento de 27 de Diciembre del año próximo pasado.

Morelia, Enero 28 de 1875.—N. Caballero.

Es copia que certifico. Morelia, Febrero 15 de 1875.—Isidro Aleman secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito

Morelia, Febrero 6 de 1875.

Visto este juicio de amparo intentado por el C. Lic. Bruno Patiño en representación y con poder de la mayoría de los indígenas del pueblo de Charo, contra el C. Prefecto de esta Capital, por creer violadas en las personas de sus representados, las garantías de los artículos 9, 16 y 27 de la Constitución federal por haber adjudicado la autoridad referida á los Ciudadanos que constan en la noticia de fojas 59, indígenas del mismo pueblo, los terrenos llamados "Quiritzeo, Yervabuena, Guayavo, Terro, Lagunillas, los Troges, la Peña, el Platanar, el Saucito, la Calera, el Durazno, los Cajones, el Bosque, la Cofradía, los Ocuare, la Camuza y el Arrenal de que eran arrendatarios, conforme á lo prevenido en la ley de 25 de Junio y circular de 9 de Octubre de 1856, y cuyos terrenos eran de la propiedad de la comunidad de indígenas referida, y

Considerando: 1º Que el Juicio instanciado por la parte quejosa, ha sido establecido en el artículo 104 de la Constitución y

reglamentado por la ley de 20 de Enero de 1869, para proteger todas y cada una de las garantías contenidas en los artículos de la Sección 1ª, tit. 1º, que trata de los derechos del hombre. Que para que proceda este recurso constitucional es necesario, conforme á la segunda, primero: que el hecho que motiva la queja viole alguno de estos derechos, que esté comprendido en alguna de las tres fracciones del artículo 1º, y finalmente, que para declarar si ha ó no lugar al amparo, es preciso examinar la naturaleza del hecho y decidir si esta vulnera ó no las garantías invocadas.

2º Que la providencia que ha motivado el presente juicio, es la adjudicación que el C. Prefecto de esta Capital hizo á las personas que constan en la noticia de fojas 59, de los terrenos enumerados en la misma, en cumplimiento de la ley y circular citadas al principio. El apoderado de los quejosos cree, que este hecho ataca la garantía del art. 9 constitucional, porque con él se impide á los indígenas de Charo, asociarse pacíficamente para un objeto lícito; pero esta creencia no pasa de una simple apreciación de dicho representante, sin que esta haya demostrado que el acto del C. Prefecto haya traído como consecuencia, la suspensión de aquel derecho, ni que en lo sucesivo pueda ocasionarla, pues lo que han querido la ley de 25 de Junio y circulares de 26 de Agosto y 9 de Octubre de 1856, es que todo terreno cuyo valor no pase de doscientos pesos, conforme á la base de la primera, se adjudique á los respectivos arrendatarios, ya sea que lo tengan como de repartimiento, ya pertenezca á los Ayuntamientos, ó esté de cualquier modo sugeto á la desamortización, porque en la operación establecida por dicha ley, entran los bienes comunales para que se repartan entre los vecinos de los pueblos que los poseen, y, como dice la primera de las circulares citadas, sería destruir completamente el objeto de la ley, privar á los arrendatarios del derecho que se les ha otorgado y anular su principal

fin, que es la subdivisión de la propiedad rústica, principalmente entre las clases menesterosas. Finalmente, aunque es permitido reunirse ó asociarse para todo objeto lícito, este deja de serlo cuando contradice alguna restricción de este derecho establecido por la ley. *Id possumus quod de jure possumus.*

3º Que si bien es cierto que antes de la sanción de la ley que desamortizó los bienes de corporaciones eclesiásticas y civiles, los indígenas de Charo usaban de un derecho perfecto, poseyendo y disfrutando en común los montes, pastos y aguas, que se reservaron después del reparto de sus tierras, también lo es, que este derecho cesó desde que el legislador previno que los bienes comunales entrasen en la desamortización, y desde que declaró á las comunidades incapaces de seguir administrando y poseyendo tales bienes. (Artículo 25 de la ley citada.) La misma disposición encomendó en su artículo 5º á las autoridades políticas, el cumplimiento y ejecución de sus preceptos; y si por autoridad competente debe entenderse aquella á quien la ley comete determinadas facultades, es inconcuso que el C. Prefecto lo fué para las adjudicaciones reclamadas, sin que por este hecho se haya violado la garantía del artículo 16, invocada por los quejosos. Y aunque es cierto que la ley de 25 de Junio fué expedida antes de la Constitución de 1857, también lo es que lejos de pugnar con alguno de los artículos de esta que contienen las garantías individuales, está absolutamente conforme con los principios que establecen sus adiciones y reformas, y la primera es una de las de esta que han sido elevadas al rango de preceptos constitucionales. No siendo además las operaciones de adjudicación, controversias judiciales, de ninguna manera podía corresponder su ejecución á los Tribunales federales, y por lo mismo es inexacto decir, que las autoridades de los Estados, al tomar parte en la ejecución de las leyes generales, invaden facultades de la esfera federal, re-

sultando de esto, que con la providencia reclamada, ha quedado incólume la garantía del artículo 16 constitucional.

4º Que el derecho de propiedad garantizado por el artículo 27, no es tan lato é indefinido, como lo pretenden los quejosos, pues tiene las limitaciones que establecen las leyes en el sentido del bien público y del perjuicio de los particulares. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin mas limitaciones que las que fijan las leyes: así la definen el artículo 827 del Código civil y las leyes 27 tit. 2, 1ª tit. 28, part. 3ª y 10, tit. 33, part. 7ª. La adjudicación de los terrenos de Charo, hecha á los arrendatarios, individuos del mismo pueblo, no hizo mas que repartir entre algunos de estos, la propiedad que en dichos terrenos tenían todos los miembros de la comunidad; pero dejando su precio y sus frutos á favor del comun, en los términos del art. 7º de la ley de 25 de Junio, y por consiguiente, á favor tambien de los objetos de utilidad del mismo pueblo á que estaban destinados. No ha habido pues violación de la garantía invocada, puesto que las adjudicaciones no han hecho otra cosa que modificar y restringir el derecho de propiedad de los bienes comunales.

5º Que lo alegado por los quejosos, sobre que los terrenos materia de las adjudicaciones hechas por el C. Prefecto, están expresamente exceptuados por la parte final del artículo 8º de la ley tantas veces citada, carece de exactitud; porque dichos terrenos no estaban exclusivamente destinados al servicio público, y si por tal se entiende la protección ó fomento que con sus frutos se prestaba al Juzgado y escuela de Charo, ni este destino proviene de la ley, ni las adjudicaciones impiden que los réditos del capital que los adjudicatarios reconocen en dichos terrenos, se sigan invirtiendo en aquel útil objeto.

Resultando de todo lo expuesto: 1º Que los terrenos adjudicados por el C. Prefecto á algunos indígenas de Charo, no están ex-

ceptuados de la desamortización prevenida por las leyes: 2º Que la que se aplicó al caso que motiva la queja, en vez de ser contraria á la Constitución, es una de sus adiciones y reformas: 3º Que el acto reclamado, no puede impedir de ningun modo á los indígenas de Charo, asociarse con un objeto lícito: 4º Que las adjudicaciones fueron hechas por la autoridad señalada en la ley, y por lo mismo, la competente para el caso: 5º Que habiéndose ajustado aquella operación á los preceptos legales, y á los principios del derecho en materia de propiedad, no se ha atacado esta: 6º Que no siendo las operaciones de desamortización controversias judiciales, no ha habido usurpación de facultades federales. Por lo que y con fundamento del artículo 101 de la Constitución federal y la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos, contra la providencia del C. Prefecto de esta Capital, que adjudicó algunos terrenos pertenecientes á la extinguida comunidad de Charo, á los arrendatarios de ellos, por no haber violado con estos actos, las garantías de los artículos 9, 16 y 27 de la Constitución federal. Hágase saber, publíquese, sáquense y remítanse á quienes corresponde las copias necesarias, y dése cuenta con las actuaciones á la Suprema Corte de Justicia. Definitivamente juzgando, lo decretó el C. Juez de Distrito del Estado de Michoacan. Doy fe.—*Gabino Ortiz*, una rúbrica.—*Ante mí, Isidro Aleman*, una rúbrica.

Es copia que certifico. Morelia, Febrero 15 de 1875.—*Isidro Aleman*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Junio 1º de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan, por el Lic. Bruno Patiño, en representación de la mayor parte de los vecinos de Charo,

contra los procedimientos del Jefe Político de Morelia, que ha adjudicado á varias personas, terrenos pertenecientes á la comunidad de indígenas del mismo Charo; cuyo procedimiento vulnera en sentir de los quejosos, las garantías que consignan los arts. 6º, 16 y 27 de la Carta fundamental de la República; y

Considerando: que los interesados alegan como fundamento de su queja, que los terrenos en cuestion fueron adquiridos por compra que de ellos hizo la comunidad de indígenas de Charo, y por lo mismo, no son de repartimiento ni están sujetos á las leyes de desmortizacion; que en consecuencia, aplicándoles estas leyes, como lo ha hecho el Jefe Político de Morelia, ha inculcado, 1º, el derecho de asociacion que reconoce el artículo 9º constitucional, por cuanto se impide á los solicitantes usar en comun de los montes, pastos y aguas que existen en los expresados terrenos; 2º, la garantía de que se ocupa el artículo 16 del mismo Código; por la incompetencia de la Jefatura Política para intervenir en los negocios de adjudicacion, pues si bien la ley de 25 de Junio de 1856, encomendó á las autoridades políticas la reparticion de los terrenos de comunidad de indígenas, tratándose de una ley federal, como lo es la de 25 de Junio, su ejecucion corresponde á las autoridades federales, conforme á los principios establecidos en la Suprema ley de la Nacion; y 3º, el artículo 27, porque se priva á los quejosos de una propiedad particular sin las formalidades legales.

Considerando: que segun aparece de las constancias de autos, los terrenos en cuestion fueron adquiridos por la comunidad de indígenas de Charo, como tal comunidad; como lo comprueban los testimonios en que está redactada la escritura de constitucion de censo, que obra á fojas 1ª y siguientes del cuaderno principal, cuanto el hecho de que el contrato se verificó por intermedio de las autoridades locales en legítima representacion del municipio; que por lo mismo, esos

terrenos han podido ser considerados como pertenecientes á una corporacion civil, y por consiguiente sujetos á las leyes de desamortizacion.

Considerando: que si bien el artículo 9 del Pacto federal, declara que á nadie se le puede coartar el derecho de asociarse y reunirse pacíficamente con un objeto lícito; el artículo 27 del mismo Código establece, que ninguna corporacion civil ó eclesiástica, podrá administrar por sí bienes raíces.

Considerando: que la ley de 25 de Junio de 1856, confirió especialmente á las autoridades políticas de cada lugar, la facultad de intervenir en la reparticion de los bienes de comunidad de indígenas; y que esta prevencion en nada se opone al sistema federativo que ha adoptado la Nacion.

Considerando: que el mismo artículo 27 constitucional, que segun alegan los interesados, ha sido infringido por el Jefe Político de Morelia, prohíbe como se ha manifestado, que las corporaciones civiles posean bienes raíces en propiedad.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion de la República, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Morelia, en 6 de Febrero del presente año, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los quejosos representados por el Lic. Bruno Patiño, contra la providencia del ciudadano Prefecto de Morelia, que adjudicó algunos terrenos pertenecientes á la extinguida comunidad de Charo, á los arrendatarios de ellos.

Así por mayoría de votos, lo decretaron los CO. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron—*José María Iglesias. M. Auza.—Ezequiel Montes.—M. Zavala.—José M. Arteaga.—Ignacio Ramírez.—L. Velazquez.—José García Ramírez.*

Es copia que certifico. México, Junio 26 de 1875.—*Enrique Landa.*